

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CASTILLA Y LEÓN (pp. 2-7)

—

DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS A CASTELLA I LLEÓ (pp. 8-13)

IÑIGO SANZ RUBIALES

*Catedrático de Derecho Administrativo (acreditado)/ Catedràtic de Dret Administratiu
(acreditat)*

Universidad de Valladolid

Sumario: 1. Inexistencia de actividad legislativa ambiental como consecuencia del estreno de la nueva legislatura. 2. La escasa actividad reglamentaria ambiental. 2.1. La nueva organización administrativa: el desplazamiento de lo ambiental en una época de crisis. 2.2. Procedimiento de certificación de la eficiencia energética de los edificios. 2.3. Traspaso de personal al Consorcio de Picos de Europa. 2.4. Otra norma “adjetiva”: composición y constitución de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama. 3. Conclusiones.

1. Inexistencia de actividad legislativa ambiental como consecuencia del estreno de la nueva legislatura

Desde el punto de vista de la actividad normativa, poco se puede decir en un semestre de “puesta en funcionamiento” de un nuevo legislativo y de un nuevo Gobierno tras las elecciones autonómicas. En efecto, la renovación de las Cortes de Castilla y León con el decaimiento de los proyectos tramitados en la legislatura anterior ha llevado a que a mediados de noviembre del año en curso solo se haya aprobado una ley por el legislativo regional, ley que además carece de contenido ambiental. Ahora bien, como la actividad parlamentaria se está llevando a cabo, es previsible que en los próximos semestres se vayan aprobando algunas leyes ambientales esperadas.

En buena medida, lo mismo ha pasado con los reglamentos administrativos. Los decretos necesitan también cierto grado de elaboración, a través del procedimiento de elaboración de disposiciones generales. Las regulaciones de la actividad administrativa en materia ambiental se están haciendo de rogar. Sin embargo, aunque se puede hablar de continuidad en el Gobierno regional tras las elecciones de mayo, es cierto que han cambiado los responsables de la Consejería de Medio Ambiente, que esta se ha fusionado con la de Fomento y que ha habido, por lo tanto, cambios importantes en la organización administrativa que se han plasmado normativamente, cambios que se comentarán a continuación.

2. La escasa actividad reglamentaria ambiental

2.1. La nueva organización administrativa: el desplazamiento de lo ambiental en una época de crisis

Tras la celebración de las elecciones regionales y la (re)elección del presidente de la Junta de Castilla y León, este pasó a aprobar el primer paso de la reestructuración de la Administración autonómica a través del Decreto 2/2011, de 27 de junio, de Reestructuración de Consejerías. En lo que a nosotros atañe, el Decreto crea la nueva

Consejería de Fomento y Medio Ambiente (art. 1), a la que corresponden (art. 6), además de las competencias que hasta el momento tenía atribuidas la Consejería de Fomento, las de “Medio Ambiente hasta ahora atribuidas a la Consejería de Medio Ambiente, con la excepción de la relativa a la Ordenación del Territorio”.

Se trata de un decreto de “crisis”. Y en épocas de crisis, como es sabido, una de las primeras políticas que se sacrifica en la actividad pública es la ambiental. La desaparición de la Consejería de Medio Ambiente constituye un indicio claro de que esta materia ya no va a gozar de la importancia (política y presupuestaria) que tuvo en los años de bonanza económica y que va a ser desplazada por otras líneas políticas más acordes con la situación de constricción económica y de restricciones en el gasto público. De hecho, la dotación de la Consejería en los presupuestos de 2011 ya había perdido más de un 30% en relación con los presupuestos del año anterior, en los que ya sufrió un importante recorte, y ahora la reestructuración confirma la posposición del medio ambiente respecto de la materia “Fomento”. No es casual, en este sentido, que el nuevo consejero de Fomento y Medio Ambiente haya sido consejero de Fomento hasta esta legislatura: ello es indicativo de cómo puede ser la prelación de objetivos de la política autonómica durante los próximos años.

Una vez aprobado el Decreto de Reestructuración de Consejerías, la Junta ha ido aprobando a continuación los decretos reguladores de la estructura orgánica de las distintas consejerías. En concreto, el Decreto 34/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, fija, bajo la directa dependencia del consejero, una serie de órganos centrales (art. 2), entre los que ejercen propiamente competencias ambientales la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental (cuyas competencias se centran, fundamentalmente, en la planificación, programación, gestión y ejecución en las materias de evaluación, prevención y control ambiental, auditorías ambientales, calidad del aire, cambio climático, ruido, residuos, suelos contaminados y educación ambiental, tal y como recuerda el artículo 9) y la Dirección General del Medio Natural (cuyas competencias se refieren a la protección de la fauna, de la flora, de los espacios naturales, de los montes y vías pecuarias, de la caza y pesca, etc.: artículo 10). Pero, además, la nueva Dirección General de Carreteras e Infraestructuras asume una importante carga competencial (en lo ambiental) porque, además de las específicas por razón de la materia (carreteras e infraestructuras ferroviarias), el Decreto en cuestión le atribuye —entre otras— las

competencias en materia de aguas y en concreto: “g) La planificación y programación de la política relativa a las aguas y sus infraestructuras en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma, h) El abastecimiento de agua a las poblaciones en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma; i) La depuración de aguas residuales en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma, y j) El encauzamiento, defensa, adecuación y recuperación de las márgenes de los ríos en áreas urbanas”. Como puede comprobarse fácilmente, estas competencias en materia de aguas son, sin embargo, residuales porque unos meses antes, el 17 de marzo, por Sentencia 32/2001, el Tribunal Constitucional ya había anulado el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto, que preveía el traspaso de competencias en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos sobre la cuenca del Duero a la Comunidad Autónoma. (Con posterioridad se aprobó el Decreto 62/2011, de 20 de octubre, por el que se modifican las estructuras orgánicas de las consejerías de la Presidencia, de Fomento y Medio Ambiente y de Economía y Empleo, que vino a adaptar las competencias autonómicas afectadas por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo. Sin embargo, no incide propiamente en aspectos ambientales y únicamente en algunos elementos de la materia ordenación del territorio.)

Para culminar la nueva organización administrativa, conviene mencionar los nombramientos de los titulares de la nueva Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Por Acuerdo 9/2011, de 27 de junio, del presidente de la Junta de Castilla y León, se nombran los nuevos consejeros de la Junta de Castilla y León, y en concreto pasa a ser consejero de Fomento y Medio Ambiente Antonio Silván Rodríguez, que hasta el momento era consejero de Fomento. La Secretaría General pasa a ser ocupada por Carmen Ruiz Alonso (Acuerdo 93/2011, de 30 de junio, de la Junta de Castilla y León).

2.2. Procedimiento de certificación de la eficiencia energética de los edificios

Por Decreto 55/2011, de 15 de septiembre, se regula el procedimiento para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción en la Comunidad de Castilla y León. Desde el punto de vista sustantivo, esta es la norma que, desde la perspectiva ambiental, tiene más importancia entre los diversos reglamentos

aprobados por la Administración autonómica en el segundo semestre de 2011.

La eficiencia energética de los edificios constituye uno de los ámbitos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con una política propia dentro de la Unión Europea. Tanto el ámbito doméstico como el del transporte quedan fuera del mercado de emisiones y son objeto de regulaciones específicas por parte del derecho comunitario. Los objetivos de la Comisión en este ámbito son extraordinariamente ambiciosos, como ha puesto de manifiesto recientemente la hoja de ruta hacia una Europa descarbonizada; ahí se señala que el objetivo de la eficiencia energética es ahorrar un 20% de la energía consumida de aquí (2011) al año 2020. Pero para ello es preciso cambiar la política actual: “con las políticas actuales, sin embargo, de aquí a 2020 solo se alcanzaría la mitad del objetivo del 20% de eficiencia energética”; de ahí la necesidad de aplicar “íntegramente” el nuevo Plan de Eficiencia Energética COM(2011) 109, presentado junto con esta comunicación y elaborado por la Comisión Europea en respuesta al Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, que instaba a “una actuación resuelta que permita aprovechar el considerable potencial de incremento del ahorro energético que existe en los edificios, los transportes y los procesos de producción” (Conclusiones del Consejo Europeo, 4/2/2011, n.º EUCO 2/11). En definitiva, la eficiencia energética constituye, sin duda, la asignatura pendiente de la política europea de lucha contra el cambio climático que ahora la Unión parece decidida a afrontar con carácter definitivo.

Este decreto tiene su justificación última en la propia normativa comunitaria relativa a la eficiencia energética de los edificios. En efecto, la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios (modificada por la Directiva 1137/2008, de 22 de octubre, y hoy derogada por la Directiva refundida 2010/31, de 19 de mayo), establecía la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética. Este certificado deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, de forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética, con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía. Esta directiva fue transpuesta en parte por el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción y un distintivo común en todo el territorio nacional denominado

etiqueta de eficiencia energética. Dicho procedimiento básico para la certificación prevé la participación de la Comunidad Autónoma en una serie de trámites que regula este decreto de 2011. Se echa en falta, no obstante, una transposición de la nueva Directiva (citada más arriba) 2010/31, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que incluye prescripciones normativas que se enmarcan en la lucha contra el cambio climático (tal y como la asume el paquete energía y medio ambiente aprobado en enero de 2008 y plasmado normativamente en abril de 2009), aporta importantes datos sobre el papel de los edificios en el consumo total energético de la Unión Europea, y resulta más incisiva que la anterior en la medida en que, entre otras exigencias, impone que los edificios públicos construidos a partir de 2019 y los restantes construidos a partir de 2021 tengan un “consumo de energía casi nulo” (art. 9.1).

Pero, además, la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León impone a la Administración autonómica la obligación de regular el otorgamiento de certificados o etiquetas energéticas y/o medioambientales que acrediten las medidas de ahorro de agua y energía, así como la utilización de materiales no contaminantes y de energías renovables (art. 19.4). Desde esta perspectiva, el Reglamento que se comenta viene a desarrollar la Ley regional de vivienda, cumpliendo con la obligación impuesta por esta.

El procedimiento para la certificación de eficiencia energética de edificios consta de tres fases, que se desarrollan en el Reglamento comentado; también se especifica la vigencia, renovación y actualización de dicho certificado. Para proteger a los consumidores se crea también la obligación de informar de la calificación energética del edificio en las operaciones de venta o alquiler, de acuerdo con la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, y el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero. Además, se crea el Registro Público de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad de Castilla y León, y se establecen los requisitos de inscripción.

Finalmente, se regula en profundidad la etiqueta de eficiencia energética (capítulo IV), y se señalan sus requisitos en cuanto a contenido, formato, uso y exhibición.

2.3. Traspaso de personal al Consorcio de Picos de Europa

Por RD 370/2010, de 26 de marzo, fueron traspasados a la Comunidad de Castilla y León las funciones y los servicios de la Administración del Estado en materia de conservación de la naturaleza. Pocos meses más tarde se dictó el Decreto 63/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación y del Consorcio Interautonómico para la Gestión Coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa (véanse, al respecto, los comentarios incluidos en el volumen II, n. 1 de 2011, de esta revista, págs. 8-9), cuyo artículo 23 determina que la plantilla de personal del Consorcio estará integrada por su personal propio y por el conjunto de funcionarios y personal laboral adscritos a este por las administraciones consorciadas, debiendo adscribir cada una de ellas al menos el equivalente al personal que le sea traspasado. Pues bien, el Decreto 29/2011, de 16 de junio, de adscripción al Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa del personal traspasado por el Real Decreto 1742/2010, de 23 de diciembre, tiene por objeto regular el procedimiento de adscripción al Consorcio del personal de la Administración del Estado traspasado a la Comunidad de Castilla y León.

Se trata, como puede comprobarse con una simple lectura de sus preceptos, de una norma relativa a la función pública, por lo que los aspectos ambientales no dejan de ser secundarios.

2.4. Otra norma “adjetiva”: composición y constitución de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama

Tras la creación, el año pasado (*vid.* el volumen II, n. 1 de 2011, de esta revista, pág. 3), del nuevo espacio protegido de la Sierra Norte de Guadarrama por la Ley 18/2010, de 20 de diciembre, de Declaración del Parque Natural “Sierra Norte de Guadarrama” (Segovia y Ávila), era necesario proceder a regular la composición y constitución de la Junta Rectora, tal y como establecen la DF 2.^a de la Ley de Declaración y el artículo 40 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. Para cumplir con esta obligación, la Junta procedió a aprobar el Decreto 47/2011, de 18 de agosto, por el que se regula la composición de la Junta Rectora del Parque Natural “Sierra Norte de Guadarrama” (Segovia y Ávila).

3. Conclusiones

En resumen, en este segundo semestre de 2011 se puede hablar de escasa actividad normativa, tanto legislativa como reglamentaria, salvo en lo relativo a la organización administrativa del medio ambiente.

Sumari: 1. Inexistència d'activitat legislativa ambiental com a conseqüència de l'estrena de la nova legislatura. 2. L'escassa activitat reglamentària ambiental. 2.1. La nova organització administrativa: el desplaçament de les qüestions ambientals en època de crisi. 2.2. Procediment de certificació de l'eficiència energètica dels edificis. 2.3. Traspàs de personal al consorci dels Picos de Europa. 2.4. Una altra norma "adjectiva": composició i constitució de la Junta Rectora del Parc Natural "Sierra Norte de Guadarrama". 3. Conclusions.

1. Inexistència d'activitat legislativa ambiental com a conseqüència de l'estrena de la nova legislatura

Des del punt de vista de l'activitat normativa, poca cosa podem dir en un semestre de "posada en funcionament" d'un nou legislatiu i d'un nou govern després de les eleccions autonòmiques. En efecte, la renovació de les Corts de Castella i Lleó amb el decaïment dels projectes tramitats en la legislatura anterior ha portat que a mitjan novembre de l'any en curs el Legislatiu regional només hagi aprovat una llei, que, a més, no té contingut ambiental. Ara bé, com que l'activitat parlamentària s'està duent a terme, és previsible que en els pròxims semestres s'aprovin algunes lleis ambientals esperades.

En gran manera, ha passat el mateix amb els reglaments administratius. Els decrets també necessiten un cert grau d'elaboració, mitjançant el procediment d'elaboració de disposicions generals. Les regulacions de l'activitat administrativa en matèria ambiental s'estan fent pregar. No obstant això, tot i que es pot parlar de continuïtat en el govern regional després de les eleccions del maig, és cert que han canviat els responsables de la Conselleria de Medi Ambient, que aquesta s'ha fusionat amb la de Foment i que hi ha hagut, per tant, canvis importants en l'organització administrativa reflectits normativament, i que comentarem a continuació.

2. L'escassa activitat reglamentària ambiental

2.1. La nova organització administrativa: el desplaçament de les qüestions ambientals en època de crisi

Després de les eleccions regionals i de la (re)elecció del president de la Junta de Castella i Lleó, aquest ha aprovat el primer pas de la reestructuració de l'Administració autonòmica, per mitjà del Decret 2/2011, de 27 de juny, de reestructuració de conselleries. En el que ens afecta a nosaltres, el decret crea la nova Conselleria de Foment i Medi Ambient (art. 1), a la qual corresponen (art. 6), a més de les

competències que fins al moment tenia atribuïdes la Conselleria de Foment, les de *“Medio Ambiente hasta ahora atribuidas a la Consejería de Medio Ambiente, con la excepción de la relativa a la Ordenación del Territorio”*.

Es tracta d'un decret de “crisi”. I en època de crisi, com és sabut, una de les primeres polítiques que se sacrifiquen en l'activitat pública és l'ambiental. La desaparició de la Conselleria de Medi Ambient constitueix un indicatiu clar que aquesta matèria ja no gaudirà de la importància (política i pressupostària) que va tenir en els anys de bonança econòmica i que serà desplaçada per altres línies polítiques més coincidents amb la situació de constricció econòmica i de restriccions en la despesa pública. De fet, la dotació de la Conselleria en els Pressupostos de 2011 ja havia perdut més d'un 30% en relació amb els pressupostos de l'any abans, en què ja va patir una retallada important i, ara, la reestructuració confirma la posposició del medi ambient respecte de la matèria “Foment”. En aquest sentit, no és casual que el nou conseller de Foment i Medi Ambient sigui el que fins a aquesta legislatura era el de Foment: és indicatiu de com pot ser la prelación d'objectius de la política autonòmica en els propers anys.

Una cop aprovat el decret de reestructuració de conselleries, a continuació la Junta ha anat aprovant els decrets reguladors de l'estructura orgànica de les diferents conselleries. En concret, el Decret 34/2011, de 7 de juliol, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria de Foment i Medi Ambient, determina, sota la dependència directa del conseller, una sèrie d'òrgans centrals (art. 2), entre els quals exerceixen pròpiament competències ambientals la Direcció General de Qualitat i Sostenibilitat Ambiental (les competències de la qual se centren, fonamentalment, en la planificació, programació, gestió i execució en les matèries d'avaluació, prevenció i control ambiental, auditories ambientals, qualitat de l'aire, canvi climàtic, soroll, residus, sòls contaminats i educació ambiental, tal com recorda l'art. 9) i la Direcció General de Medi Natural (les competències de la qual fan referència a la protecció de la fauna, de la flora, dels espais naturals, de muntanyes i vies pecuàries, caça i pesca, etc.: art. 10). Però a més, la nova Direcció General de Carreteres i Infraestructures assumeix una càrrega competencial important (des del punt de vista ambiental), perquè, a més de les competències específiques per raó de la matèria (carreteres i infraestructures ferroviàries), el decret en qüestió hi atribueix —entre altres— competències en matèria d'aigües i, en concret: *“g) La planificación y programación de la política relativa a las aguas y sus infraestructuras en el ámbito de las competencias de la Comunidad*

Autónoma, h) El abastecimiento de agua a las poblaciones en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma; i) La depuración de aguas residuales en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma, y j) El encauzamiento, defensa, adecuación y recuperación de las márgenes de los ríos en áreas urbanas”. Com podem comprovar fàcilment, no obstant això, aquestes competències en matèria d'aigües són residuals, perquè uns quants mesos abans, el 17 de març, per mitjà de la Sentència 32/2001, el Tribunal Constitucional ja havia anul·lat l'article 75.1 de l'Estatut d'autonomia de Castella i Lleó aprovat per la Llei orgànica 14/2007, de 30 de novembre, de reforma de l'Estatut, que preveia el traspàs de competències en matèria de recursos i aprofitaments hidràulics sobre la conca del Duero a la comunitat autònoma. (Posteriorment, es va aprovar el Decret 62/2011, de 20 d'octubre, pel qual es modifiquen les estructures orgàniques de les conselleries de Presidència, Foment i Medi Ambient i d'Economia i Ocupació, que va adaptar les competències autonòmiques afectades pel Reial decret llei 3/2011, de 18 de febrer, de mesures urgents per a la millora de l'ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives d'ocupació. No obstant això, no incideix pròpiament en aspectes ambientals i únicament en alguns elements de la matèria ordenació del territori).

Per culminar la nova organització administrativa, convé portar a col·lació els nomenaments dels titulars de la nova Conselleria de Foment i Medi Ambient. Per mitjà de l'Acord 9/2011, de 27 de juny, del president de la Junta de Castella i Lleó, es nomenen els nous consellers de la Junta de Castella i Lleó, i, en concret, és conseller de Foment i Medi Ambient, Antonio Silván Rodríguez, que fins al moment era conseller de Foment. La Secretaria General l'ocupa Carmen Ruiz Alonso (Acord 93/2011, de 30 de juny, de la Junta de Castella i Lleó).

2.2. Procediment de certificació de l'eficiència energètica dels edificis

Per mitjà del Decret 55/2011, de 15 de setembre, es regula el procediment per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció a la Comunitat de Castella i Lleó. Des del punt de vista substantiu, aquesta és la norma que, en l'àmbit ambiental, és més important entre els diversos reglaments aprovats per l'Administració autonòmica en el segon semestre de 2011.

L'eficiència energètica dels edificis constitueix un dels àmbits de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle amb una política pròpia a la Unió Europea. Tant l'àmbit domèstic com el del transport queden fora del mercat d'emissions i són objecte de regulacions específiques del dret comunitari. Els objectius de la Comissió en aquest àmbit són extraordinàriament ambiciosos, com recentment ha posat de manifest el Full de ruta cap a una Europa descarbonitzada; s'hi s'assenyala que l'objectiu de l'eficiència energètica és estalviar un 20% de l'energia consumida d'aquí (2011) al 2020. Però, per això, cal canviar la política actual: “con las políticas actuales, sin embargo, de aquí a 2020 solo se alcanzaría la mitad del objetivo del 20% de eficiencia energética”; d'aquí ve la necessitat d'aplicar “íntegrament” el nou *Pla d'Eficiència Energètica COM (2011) 109*, presentat juntament amb aquesta comunicació, elaborat per la Comissió Europea en resposta al Consell Europeu de 4 de febrer de 2011, que instava a “*una actuación resuelta que permita aprovechar el considerable potencial de incremento del ahorro energético que existe en los edificios, los transportes y los procesos de producción*” (Conclusions del Consell Europeu, 4/2/2011, núm. EUCO 2/11). En definitiva, l'eficiència energètica constitueix, sens dubte, l'assignatura pendent de la política europea de lluita contra el canvi climàtic que, ara, la Unió sembla decidida a afrontar definitivament.

Aquest decret té la seva justificació última en la pròpia normativa comunitària relativa a l'eficiència energètica dels edificis. En efecte, la Directiva 2002/91/CE del Parlament europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2002, relativa a l'eficiència energètica dels edificis (modificada per la Directiva 1137/2008, de 22 d'octubre i avui derogada per la Directiva refosa 2010/31, de 19 de maig), establí l'obligació de posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un certificat d'eficiència energètica. Aquest certificat ha d'incloure informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis de manera que es pugui valorar i comparar la seva eficiència energètica, a fi d'afavorir la promoció d'edificis d'alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d'energia. Aquesta directiva va ser transposada en part pel Reial decret 47/2007, de 19 de gener, que aprova el Procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció, i aprova un distintiu comú a tot el territori nacional anomenat *etiqueta d'eficiència energètica*. Aquest procediment bàsic per a la certificació preveu la participació de la comunitat autònoma en una sèrie de tràmits que regula aquest decret de 2011. No obstant això, es troba a faltar la transposició de la nova Directiva

2010/31(esmentada més amunt), de 19 de maig de 2010, *relativa a l'eficiència energètica dels edificis*, que inclou prescripcions normatives que s'emmarquen en la lluita contra el canvi climàtic (tal com l'assumeix el paquet energia i medi ambient aprovat al gener de 2008 i plasmat normativament a l'abril de 2009), aporta una dada important sobre el paper dels edificis en el consum total energètic de la Unió Europea, perquè resulta més incisiva que l'anterior, en la mesura que, entre altres nombroses exigències, imposa que els edificis públics construïts a partir de 2019 i els altres construïts a partir de 2021 hauran de tenir un “*consumo de energia casi nulo*” (art. 9.1).

Però, a més, la Llei 9/2010, de 30 d'agost, del dret a l'habitatge de la Comunitat de Castella i Lleó imposa a l'Administració autonòmica l'obligació de regular l'atorgament de certificats o etiquetes energètiques o mediambientals que acrediten les mesures d'estalvi d'aigua i energia, així com la utilització de materials no contaminants i d'energies renovables (art. 19.4). Des d'aquesta perspectiva, el Reglament que comentem desplega la llei regional d'habitatge, que compleix amb l'obligació que aquesta imposa.

El procediment per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis consta de tres fases, que es fixen en el reglament esmentat; també s'especifiquen la vigència, la renovació i l'actualització del certificat. Per protegir els consumidors també es crea l'obligació d'informar de la qualificació energètica de l'edifici en les operacions de venda o lloguer, d'acord amb la Directiva 2002/91/CE, de 16 de desembre, i el Reial decret 47/2007, de 19 de gener. A més, es crea el Registre Públic de Certificacions d'Eficiència Energètica d'Edificis de la Comunitat de Castella i Lleó, i els requisits d'inscripció.

Finalment, es regula en profunditat l'“Etiqueta d'Eficiència Energètica” (capítol IV), i se n'assenyalen els requisits quant a contingut, format, ús i exhibició.

2.3. Traspàs de personal al consorci dels Picos de Europa

Per mitjà del RD 370/2010, de 26 de març, es van traspasar a la Comunitat de Castella i Lleó les funcions i els serveis de l'Administració de l'Estat en matèria de conservació de la naturalesa. No gaires mesos més tard, es va dictar el Decret 63/2010, de 30 de desembre, pel qual es van aprovar els Estatuts reguladors dels òrgans de gestió i participació i del Consorci Interautonòmic per a la Gestió Coordinada del Parc Nacional

dels Picos de Europa (vegeu, respecte d'això, els comentaris inclosos en el volum II, n. 1 (2011) d'aquesta Revista, pp. 8-9), l'article 23 del qual determina que la plantilla de personal del Consorci està integrada pel personal propi i pel conjunt de funcionaris i personal laboral adscrits per les administracions consorciades, que han d'adscriure cada una, almenys, l'equivalent al personal que li sigui traspassat. Doncs bé, aquest Decret 29/2011, de 16 de juny, d'adscripció al Consorci Parc Nacional dels Picos de Europa del personal traspassat pel Reial decret 1742/2010, de 23 de desembre, té com a objecte regular el procediment d'adscripció al Consorci del personal de l'Administració de l'Estat traspassat a la Comunitat de Castella i Lleó.

Es tracta, com podem comprovar amb una simple lectura dels seus preceptes, d'una norma relativa a la funció pública, per la qual cosa els aspectes ambientals no deixen de ser secundaris.

2.4. Una altra norma “adjectiva”: composició i constitució de la Junta Rectora del Parc Natural “Sierra Norte de Guadarrama”

Després de la creació, l'any passat (*vid.*, el volum II, n. 1 de 2011 d'aquesta Revista, p. 3) del nou espai protegit de la Sierra Norte de Guadarrama per la Llei 18/2010, de 20 de desembre, de declaració del parc natural “Sierra Norte de Guadarrama” (Segòvia i Àvila), calia regular la composició i constitució de la Junta Rectora, tal com va establir la DF 2a de la llei de declaració i l'art. 40 de la Llei 8/1991 d'espais naturals protegits de Castella i Lleó. Per complir amb aquesta obligació, la Junta va aprovar el Decret 47/2011, de 18 d'agost, pel qual es regula la composició de la Junta Rectora del parc natural “Sierra Norte de Guadarrama” (Segòvia i Àvila).

3. Conclusions

En resum: en aquest segon semestre de 2011 es pot parlar d'activitat normativa escassa, tant legislativa com reglamentària, excepte pel que fa a l'organització administrativa del medi ambient.